

C.A. de Santiago

Santiago, seis de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece la abogada Pamela Cisternas Cortés, en representación convencional de Vendomática S.A., en causa RUC 2010036720-4, Rit 227-2023, seguida ante el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de catorce de agosto pasado por la cual se absolvió a Mauricio Andrés Gálvez Cantillana, de la acusación formulada en su contra por la querellante Vendomática S.A., que le imputó ser autor del delito consumado de apropiación indebida, previsto en el artículo 470 N°1 del Código Penal.

El mencionado recurso se fundamenta en la causal prevista en el artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal.

En la audiencia de 28 de septiembre último efectuada para conocer del recurso, a la cual comparecieron tanto la querellante como la Defensoría Penal Pública, la parte recurrente reiteró los planteamientos consignados en su arbitrio, solicitando la defensa el rechazo de este.

Se fijó como fecha para la lectura del fallo la audiencia del día de hoy.

Considerando:

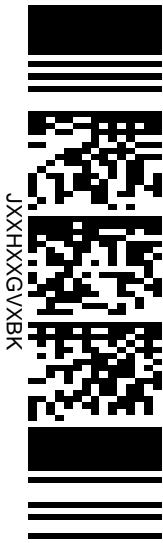
Primero: Que como se ha consignado en lo expositivo, la representante de la parte querellante ha interpuesto recurso de nulidad fundado en la causal prevista en la letra e) del artículo 374), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal. Refiere que la sentencia no se hace cargo de toda la prueba rendida en el juicio y, respecto de aquella que valora, lo hace con infracción a lo dispuesto en el último precepto señalado. Como consecuencia de lo anterior, afirma, se genera una argumentación errada o que impide en definitiva reproducir el razonamiento del Tribunal al momento de decidir la absolución del acusado. Asevera que el juzgador debe hacerse cargo,



en su fundamentación, de toda la prueba producida, cuestión que en la especie no se cumpliría a cabalidad. Así, agrega, no fluyen los razonamientos lógicos que conduzcan a la absolución del acusado.

Luego de reproducir el motivo décimo del fallo censurado, la recurrente aduce que aquel razona sobre la base de que la prenda sin desplazamiento no es un título fiduciario que obliga a la restitución de la especie, por lo cual comprende que el dueño de una cosa no está obligado a restituir lo propio, pasando por alto, dice, las disposiciones del propio contrato, en el cual se establece con claridad que en caso de incumplimiento de las obligaciones del acusado se realizaría de inmediato la prenda. Lo anterior, a su entender, importa su obligación de restituir la especie empeñada, de acuerdo con lo estipulado en el numeral segundo de la cláusula novena del contrato. Adiciona que, de conformidad con los principios de la lógica, el querellado debió haber pagado el monto adeudado para adquirir definitivamente el furgón y, de no ser así, debió haberlo devuelto a la empresa, pues no era dueño de aquél, y pesaba sobre él la obligación de restitución. Afirma que el análisis de la documental, valorada de forma razonada y lógica, permiten comprender que el acusado, luego de no pagar la deuda contraída y no hacer devolución del vehículo, tampoco procedió a dar cumplimiento a la obligación de celebrar los contratos acordados, lo que llevó a hacerlo mediante mandato, según se había estipulado en el contrato de prenda. Como corolario, señala que resulta evidente que la falta de una completa fundamentación de la sentencia impugnada impide la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que se arribó en ella y, por lo mismo, incurre en el vicio que se ha dado en llamar de “falsa fundamentación” o “fundamentación aparente”.

Concluye pidiendo se anule el juicio oral y la sentencia, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los respectivos antecedentes al Tribunal no inhabilitado a fin de que se proceda a la realización de un nuevo juicio oral.



Segundo: Que, enfrentados al arbitrio en examen resulta preciso apuntar que, sobre el concepto y definición de este tipo de recursos la Corte Suprema ha expresado que “[...] es un medio de impugnación legal en favor de los intervinientes del juicio oral en razón del especial agravio que les provoca la sentencia, o su tramitación, al infringirse sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile, vigentes, en que se cometa una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo o se incurriera en algún motivo absoluto de nulidad expresamente reconocido por la ley, con el objeto que la respectiva Corte de Apelaciones o, excepcionalmente, la Corte Suprema cuando ello corresponda, anule el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta. Se desprende de lo dicho que sus características fundamentales son las propias de un recurso extraordinario y de derecho estricto, en razón de los cuales se persigue la invalidación de la sentencia o del juicio oral o de ambos, sólo por causales expresamente definidas en la ley cumpliendo además algunas formalidades legales” (Rol Nro. 964-03).

Se concluye, entonces, que se trata de un recurso de carácter extraordinario y de derecho estricto, y que las infracciones que constituyen su fundamento, que se denuncien, deben ser de tal naturaleza que hagan variar sustancialmente lo que se ha resuelto, cuestión que debe ser acreditada fehacientemente, consignándose las peticiones concretas de lo que se solicita del tribunal encargado por ley de conocer el recurso.

Tercero: Que, como se sabe, el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal señala que es motivo absoluto de nulidad, siendo el juicio y la sentencia siempre anulados “[c]uando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e)”. Por su parte, la letra c) del artículo mencionado exige “[l]a exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en



el artículo 297”. A su turno, este último precepto prevé en cuanto a la valoración de la prueba que “[l]os tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

Cuarto: Que de las normas transcritas en el considerando que antecede se puede concluir que el vicio de nulidad invocado se produce cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: 1) cuando el tribunal omite señalar los hechos que se dan por probados o los antecedentes que permiten llegar a tal determinación; 2) cuando en el ejercicio anterior el tribunal infringe los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente asentados; 3) cuando los sentenciadores omiten valorar parte de la prueba rendida en el juicio; o, 4) cuando la fundamentación no permitiere reproducir el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en el fallo.

Quinto: Que, seguidamente, vale la pena recordar que, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia, el recurso de nulidad estructurado en el Código Procesal Penal, según sea la causal invocada, tiene por objeto asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales (comprendidas en los artículos 373 letra a) y 374) o bien conseguir sentencias ajustadas a Derecho (artículo 373 letra b). Luego, tratándose de la primera finalidad, el recurso de nulidad no puede ser sede para debatir acerca del mérito de la prueba rendida y su valoración, cuestión privativa de los jueces del fondo, sino, exclusivamente, el



cumplimiento de las diferentes garantías que el ordenamiento reconoce a los intervinientes. En ese entendido, la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, que se relaciona con la estructura sustancial de la sentencia, protege la garantía de la sentencia fundada, ya recogida en el artículo 1°, reiterada en el artículo 36 y desarrollada en los artículos 297 y 342 del mismo Código, y la razonabilidad de la misma, en la medida que la libertad de valoración de la prueba no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, como lo señala el artículo 297 del citado compendio normativo.

Sexto: Que, de este modo, la causal señalada en el considerando anterior tiene en nuestro derecho un doble objetivo: por un lado, el control del establecimiento de los hechos por parte del tribunal, en cuanto la libre apreciación de la prueba tiene como límite la no contradicción de los principios de la lógica formal, las máximas de la experiencia humana y los conocimientos científicos establecidos; y, por otra, el cumplimiento por parte del tribunal del deber de motivar las sentencias, en términos que dicha fundamentación sea suficiente para explicar el razonamiento que los sentenciadores han utilizado en sus conclusiones. En este último sentido, además, la exigencia de la letra c) del artículo 342 -en orden a que la valoración sea realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal- impone a los jueces del juicio, de acuerdo con el inciso segundo de esta disposición, el deber de analizar toda la prueba producida, incluyendo la que se ha desestimado, indicando las razones que se hubieren tenido en cuenta para hacerlo. Seguidamente, como se puede apreciar, la obligación de fundamentación no sólo se refiere a los medios de prueba que sirven para el establecimiento de los hechos penalmente relevantes sino, además, con toda aquella prueba que se hubiere rendido, que se relacione con estos presupuestos fácticos o que forme parte de la teoría del caso de los intervinientes, de modo de explicitar a las partes el razonamiento que lleva al tribunal a desechar su prueba o alegaciones.



Séptimo: Que, en este entendido, por tanto, lo que esta Corte debe hacer en el caso de autos, considerando la causal de nulidad invocada por la recurrente, es analizar si existe un razonamiento lógico del tribunal de la instancia en la sentencia censurada, satisfaciendo las exigencias que impone el Código Procesal Penal en esta materia y en los términos que se han señalado en las reflexiones que anteceden.

Luego, para verificar la objeción planteada por la defensa en su libelo de invalidación, que se sustenta básicamente en la ausencia de ponderación en el fallo de toda la prueba producida y de razonamientos lógicos que conduzcan a la absolución del acusado, debe analizarse especialmente lo expuesto en el considerando décimo de la sentencia impugnada. En dicho fundamento –y luego de haber analizado en el motivo anterior el tipo penal de apropiación indebida invocado por la querellante– los juzgadores abordan detalladamente la prueba rendida en juicio. Allí dejan sentada la reconstrucción de los presupuestos fácticos que resulta posible realizar de acuerdo con aquella, arribando a la conclusión que en el caso sub judice no se configura ningún delito, descartando no solo la apropiación indebida sino también la defraudación o algún ilícito de la Ley de prenda sin desplazamiento.

Para alcanzar tal determinación analizan y escrutan las probanzas rendidas, haciéndose cargo de aquella documental identificada en el fundamento quinto del mismo fallo, y que fuera aportada por la querellante, considerando que, según se consigna, la defensa no aportó la propia; y resultando relevante para los jueces, según trasciende del mencionado razonamiento, “[...] la declaración expresa y por escrito de la empresa querellante de haber recibido la especie, esto es, que está en su poder”, que, dicen, subsiste en la prueba aportada.

Octavo: Que de lo expresado fluye que el fallo impugnado se ha ocupado de desarrollar los argumentos que sirven de basamento a la decisión que se revisa, valorando las probanzas rendidas en los precisos términos que dispone el artículo 297 del Código Procedimental del ramo, esto es, con apego a los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los principios científicamente afianzados. Entonces, de

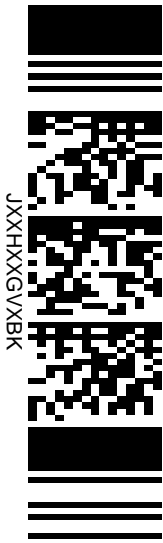


contrario a lo que sostiene la recurrente, la sentencia censurada ha sido pronunciada en virtud de una completa y debida apreciación y valoración de la prueba vertida, sin que se adviertan las deficiencias postuladas en el libelo que en esta sede se examina.

A lo anterior debe adicionarse que aun cuando en el arbitrio se esgrime una supuesta falta de valoración de “toda la prueba producida”, lo cierto es que del contenido del mismo se advierte que lo realmente cuestionado dice relación con la manera cómo aquella fue ponderada y no con una verdadera omisión. Así, discute sobre la forma como deben apreciarse las cláusulas del contrato, lo que, a su entender, conduciría a concluir que el acusado incurrió en un incumplimiento del mismo, en la forma que explica.

Noveno: Que, como corolario, y de la manera que se ha anotado en los motivos precedentes resulta que el fallo impugnado se ha ocupado de desarrollar los argumentos que sirven de basamento a la decisión que se revisa en la forma que exige el artículo 342, valorando las probanzas rendidas en los precisos términos que dispone el artículo 297, ambos del Código Procedimental del ramo, esto es, conforme a las exigencias y limitaciones que la sana crítica impone. Seguidamente, de los razonamientos expuestos aparece que la conclusión a la que arriban los jueces del mérito se encuentra suficientemente justificada, y según ella, los elementos de convicción no le permitieron a los jurisdicentes vencer la presunción de inocencia como regla de juicio. Lo anterior, aseveran, al no superar el estándar de convicción establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, de acuerdo al cual nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiera, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiese cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado participación culpable y penada por la ley.

En consecuencia, de contrario a lo que asevera la recurrente, la decisión censurada ha sido pronunciada en virtud de una completa y debida apreciación y valoración de la prueba vertida, aportando los



argumentos que le dan sentido y fundamento, sin que se adviertan deficiencias en su construcción, como postula el libelo que en esta sede se examina.

Décimo: Que, ciertamente, debe concluirse que la sentencia objetada de ninguna forma incumple las exigencias de las normas relacionadas con fundamentación del fallo y la ponderación de las probanzas, contenidos en los preceptos antes citados, pues satisface la rigurosidad procesal que ellas mismas reclaman, sin que se detecten las deficiencias u omisiones que se denuncian por la parte recurrente, siendo que el fallo se hizo cargo de todos los planteamientos y reprodujo -en una secuencia racional, consecuente, comprensible y, en definitiva, lógica- el razonamiento valorativo, aspecto este último con el que no está de acuerdo el oponente, y que constituye en realidad su verdadero motivo, al no compartir las conclusiones del tribunal en cuanto a la fundamentación, es decir, el escrutinio de la prueba producida, lo que no supone automáticamente la procedencia de su impugnación por esta vía.

Undécimo: Que de lo expresado se sigue que el recurso de nulidad formulado por la defensa debe ser necesariamente desechado, en todos sus extremos.

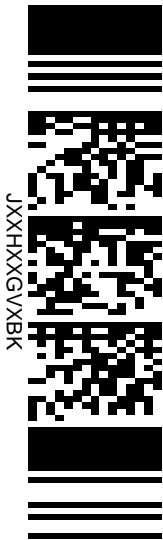
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 352, 358, 360, 372 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza, sin costas**, el recurso de nulidad interpuesto por la abogada Pamela Cisternas Cortés, en representación convencional de Vendomática S.A., en causa RUC 2010036720-4, Rit 227-2023, seguida ante el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en contra de la sentencia definitiva de catorce de agosto de dos mil veintitrés, por la cual se absolvió a Mauricio Andrés Gálvez Cantillana de la acusación formulada en su contra como autor del delito consumado de apropiación indebida, previsto en el artículo 470 N°1 del Código Penal y, en consecuencia, se declara que dicha sentencia no es nula.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.



Redacción de la Ministra señorita Romy Grace Rutherford Parentti.

N°Penal-4448-2023.



Pronunciado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P., Romy Grace Rutherford P. y Abogado Integrante Rafael Mauricio Plaza R. Santiago, seis de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a seis de octubre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

